

14 BOLETÍN ABRIL 2010

Chile-Haiti: tan lejos, tan cerca 2 • Transformación institucional, continuidad departamental y retroceso local 4 • Brasil enfrenta un largo periodo electoral 7 • La derecha chilena muestra sus cartas 9 • La CONAIE anuncia movilizaciones, el gobierno también 11 • Venezuela: la derecha se prepara para volver al parlamento 13 • Colaboracion Beatriz Stolowicz 15 • Colaboracion Luismi Uharte 17



CHILE - HAITÍ: TAN LEJOS, TAN CERCA

editorial. ▶



Latinoamerica en el Siglo XXI

ESPACIO DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS SOBRE AMÉRICA LATINA

Es un espacio de reflexión integrado por un colectivo de personas de Bolivia, Chile, Venezuela y de los Países Catalans que pretende reflexionar y profundizar sobre los procesos políticos que se desarrollan en Latinoamérica, identificando los principales retos que surgen de la creciente complejidad de las relaciones entre los movimientos populares y los gobiernos.

Chile - Haiti: tan lejos, tan cerca

Haití es considerado el país más pobre de América. Chile, ejemplo neoliberal, acaba de ser admitido en el exclusivo club la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que solo integran 31 países.

A ojos de los poderosos, lo que separa ambas naciones constituye un vivo ejemplo de lo que, en un mundo capitalista, implica caminar hacia el desarrollo.

Sin embargo, en pocos meses la ilusión construida por la maquinaria ideológica del mercado, no pudo contener el desborde de lo que parece ahora como evidente.

Es decir, por un lado Chile, el país que demuestra que el neoliberalismo, bien aplicado, permite el éxito económico y, por el otro, Haití, condenado a la pobreza por su incapacidad histórica de insertarse exitosamente en el mundo globalizado.

Dos terremotos permiten hoy poner en discusión lo que hasta hace poco parecía una verdad incuestionable.

Las imágenes de terror y muerte llenaron durante estos últimos meses los siempre ávidos canales de televisión. Se habló de miles de muertos, de destrucciones a escalas bíblicas y, hasta directamente, se culpó a la naturaleza por ensañarse con ambos países.

Pero lo que puede resultar para algunos sorprendente es que, más allá de las evidentes diferencias en la cantidad de muertes y en los niveles de destrucción, las

elites de ambos países, actuaron de una forma bastante similar.

Vamos viendo

En primer lugar en ambos casos la respuesta frente a la catástrofe fue a todas luces tardía e ineficiente. Por la magnitud del fenómeno no cabía sino la respuesta desde el Estado en su conjunto. Pero es aquí en donde comienzan los problemas.

En el caso de Haití, el supuesto rescate del país por la vía de la ocupación militar por parte de los EE.UU y su posterior entrega a la tutela militar de la ONU, tenía como excusa la necesidad de reconstruir un Estado haitiano capaz de tomar la conducción del país. Después de X años quedó demostrado de que todo no eran más que "excusas". Nada hay de ese supuesto Nuevo Estado.

Pero el caso de Chile puede ser visto como más patético. Al contrario de Haití, Chile es mostrado, y se ve a sí mismo, como un país eficiente y ordenado. Incluso, por su historial de terremotos se suponía preparado para reaccionar de manera rápida a un fenómeno de este tipo. El impacto de la ineficiencia de todo el Estado frente a catástrofe, para los chilenos ha sido brutal. Ni a nivel municipal, ni el gobierno, ni la justicia, ni siquiera la supuestamente "infalibles" FF.AA, reaccionaron.

Los errores cometidos se cobraron decenas de vidas,

y los derrumbes demostraron que el supuesto control de las construcciones no era más que un chiste trágico.

En segundo lugar, y como una forma de tapar la ineficacia de la respuesta estatal, y frente a la evidente desesperación de los millones de ciudadanos que recorrían las calles oscuras de ambos países buscando agua, comida, a alguien que les ayudara a sacar a sus familiares enterrados bajo los escombros o solo información, pues frente a toda esas masas de seres humanos simplemente angustiados hasta el extremo, la única respuesta fue recurrir a la bota militar.

En Haití, las fuerzas de ocupación recibieron rápidamente ayuda de los siempre dispuestos “marines” para poner orden entre los millones de famélicos. Con militares se restituyó la democracia y con más militares se pretende reconstruir el país. No importa el tipo de problema (si su raíz es política o una catástrofe natural), desde el punto de vista de los poderosos, la solución siempre pasa por instalar más militares extranjeros en tierra haitiana.

Es como si, aún pasado los siglos, se le quisiera cobrar al pueblo haitiano la afronta que significó para las elites que desde esta isla surgiera la primera revolución de esclavos de América.

La similitud entre ambos casos, en este punto, es evidente. A solo 3 días del terremoto, la segunda ciudad de Chile, Concepción, una extensa zona en la que viven más de 3 millones de personas, fue literalmente ocupada por 15 mil militares.

20 años de transición hacia la democracia construidos sobre el discurso de la importancia de que lo civil se impusiese por sobre lo militar, fueron borrados en pocas horas.

Los tanques y los militares armados ocuparon puestos estratégicos, como si de una invasión se tratara. A nivel operativo, se actuó con la misma planificación que se usaba en la represión de las protesta en los tiempos de Pinochet. El Chile democrático aceptó sin chistar que se castigaré a los “culpables” de los saqueos con normas propias de los tiempos de guerra. La zona completa estuvo bajo “toque de queda”, es decir sin libre circulación de las personas por las calles por 30 días. Incluso algunos diarios se dieron el lujo de sacar simbólicamente al general de su tumba, como un acto de reconocimiento póstumo por el eterno rol de “salvador de la patria” del ejército chileno. No importa si el peligro viene de un terremoto o de los comunistas, es la bota militar la que normaliza la situación.

Pero si seguimos analizando, las similitudes no acaban aquí. La catástrofe natural implicó que el mundo, informado muchas veces con grandes dosis de sensacionalismo por los grandes medios de comunicación, se apresurará en querer solidarizarse con los golpea-

dos por la naturaleza indómita.

En el caso haitiano, poco se escuchó al presidente, a los ministros y embajadores que clamaban porque la ayuda humanitaria se canalizará por la vías formales. La imagen del palacio de gobierno por los suelos fue suficientemente elocuente para respaldar el hecho de que, de forma casi instantánea, aparecieran miles de ONG que se ofrecieron a canalizar la generosidad de los millones de telespectadores sensibilizados. Sin tapujos, el discurso oficial de los medios de comunicación fue “mejor entregarle el dinero a ellos que a un gobierno corrupto”.

Y aunque en Chile, el peso de las Ong en los últimos años es sensiblemente inferior al de Haití, sorprendió de sobremanera ver que el propio gobierno, a través de sus embajadas y consulados en el mundo, instruyera a que las ayudas se canalizaran a través de la Cruz Roja, Caritas, World Vision, y una serie de otras instituciones paraestatales.

Por último, y para nada menos importante, frente a la tragedia emerge la necesidad de encarar con rapidez la reconstrucción.

Para Haití, golpeado por decenios de inestabilidad provocada por conflictos internos e intereses extranjeros, el terremoto constituye otra pesada piedra en su mochila. Su infraestructura pública y privada quedó en ruinas. El daño a las viviendas fue casi total. Las cifras no oficiales (porque en este momento en Haití no hay nada oficial) hablan de millones de personas desplazándose hacia los campos en busca de alimentos. Frente a esta situación, sorprendentemente, ahora si reaparece el gobierno. Aparece para poner la firma en una serie de préstamos y créditos para la reconstrucción, de la cual se harán generosamente cargo, sin duda, empresas trasnacionales que recibirán con agrado los recursos que el pueblo haitiano deberá pagar con años de impuestos.

Y tampoco en este punto, el exitoso Chile, ejemplo del neoliberalismo moderno, se queda atrás. Con su aparato productivo casi intacto después del terremoto, el país resulta una excelente oportunidad de negocios para la banca mundial. Piñera, el recién estrenado presidente—empresario de la derecha chilena, se apresuró a los pocos días en pedir 30 mil millones de dólares para la reconstrucción. La respuesta fue rápida, desde el FMI y desde multitud de inversores se asegura disponer de las cifras necesarias para financiar la reconstrucción. Nuevamente, poco importa, que el país vuelva al nefasto camino de la Deuda Externa.

A Chile y a Haití los separan miles de dólares en el PIB per capita, también, varios puntos en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Pero la realidad es más fuerte y los une como naciones para las cuales la cura neoliberal de sus males pasa por la misma receta.

Transformación institucional, continuidad departamental y retroceso local

Dos hechos han variado la institucionalidad de Bolivia: la promulgación de la Ley anticorrupción, que rompe con la idea del Estado como fuente de enriquecimiento personal; y, la celebración de las elecciones departamentales (y locales), que ponen de relieve un estancamiento del MAS a nivel Departamental y un retroceso a nivel local. Ambos hechos confirman al partido oficialista como sujeto clava para la transformación institucional a la vez que le requieren una profundización de la revolución cultural y democrática a nivel local.

Morales promulga la Ley anticorrupción

Evo Morales promulgó el último día de marzo, una de las leyes más esperadas e insignia del mandato renovado el pasado diciembre, la "Ley Tuto Quiroga contra la corrupción". La ley, que toma el nombre del luchador social Marcelo Quiroga Santa Cruz (1932-1982), pretende dotar al estado boliviano de los mecanismos legales necesarios para acabar con la apropiación por parte de particulares, de los recursos del pueblo Boliviano: establece procedimientos de prevención, investigación, procesamiento y recuperación del patrimonio del Estado; tipifica nuevos delitos como el cohecho transnacional y el enriquecimiento ilícito de terceros, y permite procesar a ex autoridades del Estado sospechosas de corrupción sin reconocerles inmunidad, fuero o privilegio alguno; a la vez que se crea un Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, tribunales especializados y un Sistema de Protección de testigos.

A pesar de la polémica generada, la ley tendrá un carácter retroactivo, es decir que se podrá enjuiciar a personas que cometieron el delito antes de la promulgación de la ley, hecho que la oposición denunció por

ser contraria al derecho. Morales defendió la medida afirmando que "Algunos organismos internacionales estaban un poco cuestionando el tema de la retroactividad de la ley. No pues (no es posible), para gente que roba, cómo no pues, no puede ser (la ley) sin retroactividad; la retroactividad está constitucionalizada". Se estima que en las últimas cuatro décadas, fueron sonsacadas de las arcas públicas entre 200 y 300 millones de dólares año.

Según la ministra anticorrupción, Nardy Suxo, la ley permitirá cumplir el 95% de las recomendaciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC); aunque no quiso adelantar el nombre de las personas a las que se está pensando enjuiciar, puesto que falta documentar el fundamento del presunto delito, declaró que "En el caso de la investigación de fortunas ya tenemos las denuncias, incluso algunas ya cursan desde que éramos Viceministerio, pero entonces no teníamos ningún instrumento legal que nos permita investigar y procesar, no podíamos hacerlo porque habían muchos obstáculos legales; ahora con la Ley (anticorrupción) Marcelo Quiroga Santa Cruz hallamos el camino".

Cabe recordar que la ley se promulga un año y dos meses después que el ex encargado de la administración estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y figura clave del gobierno fuera encarcelado por “conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y, entre otros, asociación delictuosa”. Según Morales, la Ley también actuará como filtro político ya que “Si nosotros aplicamos esta ley, seguramente nadie va a querer ser político, porque ya no se roba (por la rigurosidad de la ley), por tanto ya no se gana (a manos llenas). Ese es el futuro de los políticos en Bolivia”.

Elecciones regionales y locales: transformando la institucionalidad, profundizando la democracia

Así mismo, el pasado 4 de abril la ciudadanía boliviana elegía directamente sus representantes departamentales: 9 gobernadores, 8 sub gobernadores, 11 ejecutivos seccionales, 19 corregidores, 144 asambleístas departamentales elegidos de acuerdo a criterios territoriales y 100 según criterios de población y 23 que eran designados por los pueblos indígenas. Dicho proceso electoral significa la constitución de 357 territorios autónomos, cuyos habitantes, además de designar sus autoridades, administrarán sus ingresos y ejecutarán presupuestos en el ámbito de jurisdicciones y competencias que deberán definirse antes del 21 de junio. En la autonomía de 36 naciones indígenas, se reconoce además, su derecho a la “libre determinación” pudiendo administrar los recursos naturales no renovables y ejerciendo la justicia comunitaria.

Estancamiento departamental

Un total de casi doscientas organizaciones políticas (191) concurren en el proceso electoral: unas 146 tenían un carácter estrictamente local y 45 presentaban presencia en dos o más municipios. De todas ellas, las organizaciones más significativas eran el Movimiento al Socialismo que presentaba candidaturas en los 337 municipios del país y el Movimiento Sin Miedo (MSM) que presentaba candidatura en 146 municipios de los nueve departamentos.

Según los datos publicados por la Corte Nacional Electoral, el MAS obtiene la victoria electoral en seis de los nueve Departamentos bolivianos. Así, en La Paz, el partido oficialista obtiene el 50% de los votos emitidos frente el 23,2% de los que suma el MSM; en Oruro, obtiene el 59,5% frente el 29,5% del MSM; en Cochabamba, el MAS obtendría sus mejores resultados representando un 69,9% de los votos emitidos, por encima de los 26 puntos obtenidos por UN; en Chuquisaca, la victoria se fragua con un 53,6% de los votos frente los 35,5% que obtendría el C.S.T; en Pan-

do los resultados son muy ajustados: un 49,7% del MAS frente un 48,4% de C.P.; y, en Potosí presenta los mejores resultados con el 66,8% de los votos frente el 12,9% de A.S.

Por el contrario, pierde en los tres restantes: en Santa Cruz, los verdes habrían ganado con 52,8% de los votos frente los 38,2% del MAS; en Tarija los resultados proclaman ajustado vencedor a C.C. con un 48,9% frente al 44,1% del MAS; y en Beni se repite la derrota del MAS con unos resultados ajustados: un 42,5% de Primero, frente un 40,1% del oficialismo.

Revisión de actas

Tras la celebración de los comicios, Morales anunció que va a pedir la revisión de las actas de los Departamentos de Pando, Beni y Tarija donde pudo haberse cometido un presunto fraude electoral. El mismo día de las elecciones, el aspirante a la gobernación del norteño departamento de Pando por el MAS, Luis Flores, y su compañera de partido, Jessica Jordan, candidata por Beni, (nordeste de Bolivia), ya emitieron sus denuncias de fraude a mano alzada por la Corte Nacional Electoral (CNE); puesto que según declaró Jordan “En la mesa donde voté debería registrarse al menos mi voto, pero no existe tal”.

Retroceso local

A nivel local, el MAS perdió en siete de las diez principales ciudades bolivianas: en la alcaldía de La Paz resultó vencedor el ex socio de gobierno, el MSM que obtuvo el 48,5% del sufragio frente el 34,9% que obtuvo el MAS; en Oruro, el MSM repitió victoria con un 39,1% de las votaciones frente al 33,4% obtenido por el MAS; en Sucre, Pais obtuvo la alcaldía con un 47,2% de los votos frente un 31,3% del oficialismo; en Potosí AS logró convencer a más de la mitad de los votantes (un 52%) frente el 33,6% del MAS; en Tarija, Unir logró un 51% de los votos frente el 24,9% del MAS; en Santa Cruz de la Sierra, SPT logró un 55,6% de los sufragios frente el 31,8% del MAS; y en Trinidad el MAS, con un 24,5% acabó como tercera fuerza tras Primero 40,4% y MNR-Pueblo 25,8%.

En cambio, en el municipio de El Alto, el MAS logró la alcaldía con un 38,7% de los votos, frente un 30,4% de UN y un 24,4% del MSM; en Cochabamba, ganó con un 39,5% frente un 38% de UN-CP; y en Cobija, el MAS resultó ganado con un 53,7% de los votos frente el 42,9% de CP.

Incapacidad en la Media Luna departamental y ruptura en lo local

A pesar que los resultados electorales departamentales y a las alcaldías ponen de relieve que las fuerzas políticas opositoras no han logrado conformar una candidatura que logre cuestionar la legitimidad del MAS, los resultados pueden leerse como un aviso

para el partido oficialista.

A nivel departamental, el conjunto de la población del occidente del país sigue apostando por los cambios estructurales que está promoviendo el MAS; pero en el oriente del país se sigue desconfiando de que el sujeto que guíe el proceso de descentralización autonómica en la Media Luna sea el MAS. La escalada de violencia impulsada por los autonomistas más radicales de la "Media Luna" les dejó fuera de juego, pero el proceso que siguieron para reposicionarse individualmente parece que empieza a dar sus primeros frutos: no existe como antes una estrategia común para enfrentar al MAS, pero el oficialismo no ha sabido capitalizar el descrédito de los agentes hegemónicos en la Media Luna para liderar el proceso de descentralización en el oriente boliviano.

A nivel local, y a pesar que el presidente Morales declaró que se mostraba satisfecho por los resultados obtenidos porque, como en el caso de La Paz, su partido aumentaba su significación; lo cierto es que la victoria en tres de las diez principales capitales significa un retroceso electoral en el ámbito local para un partido al que la gestión de las alcaldías se le sigue resistiendo. Ciertamente, un factor a tener en cuenta para explicar este factor se encuentra en las críticas que realizaron las bases masistas durante la campaña electoral por el hecho que la dirección del MAS hubiera elegido directamente a los candidatos locales

(algunos de los cuales con una trayectoria política de derechas), decisión que conllevaba el desplazamiento de algunos dirigentes populares. Este descontento de la base social masista se habría expresado electoralmente con un "voto dual", inclinándose por su partido en la votación departamental pero no en las locales. Esta crisis habría beneficiado principalmente, al antiguo socio de gobierno del MAS, el Movimiento Sin Miedo, que ofreció sus siglas para que concurrieran los "desplazados masistas" en las elecciones locales (como el caso de Abel Mamami – ex dirigente de la Federación de Juntas Vecinales y ex ministro de Evo, que obtuvo un 24% de las votaciones en El Alto con las siglas MSM) y que podría seguir una estrategia de gestión local para plantearse como alternativa al MAS en un futuro. Por su parte, el MAS deberá generar el proyecto de revolución cultural y profundización democrática a nivel local; y, deberá hacerlo coherente con el ejemplo y la voluntad de sus dirigentes y bases sociales, dando a luz un proyecto de Ciudad propio, que aborde el reto de ser un sujeto protagónico también, en los municipios.



Brasil enfrenta a largo período electoral

Brasil se aproxima a un largo período electoral que definirá los rumbos del país en el espacio institucional. Se viene la elección de un nuevo Congreso Nacional, de los gobernadores provinciales, la votación por la Asambleas Legislativas y la elección Presidencial. Un calendario muy cargado, frente al cual muchos dirigentes del PT han tenido que redefinir su ubicación.

Para poder postular a los nuevos cargos, del gobierno Lula salieron once ministros. Y en los gobiernos provinciales fue una desbandada general. De ahora en adelante, todos los postulantes a cargos se jugarán de cuerpo y alma en sus campañas.

Mientras por arriba se preparan para la disputa de los cargos, a nivel de base la sociedad parece anestesiada por el control absoluto del mass media y por la falta de debate sobre los verdaderos problemas de la sociedad brasileña. La pauta de los medios se centra en la violencia en las ciudades, accidente de tráfico, grandes jurados o, a lo sumo, en el enfrentamiento de declaraciones, ya sea entre Lula y Fernando Enrique Cardoso, o entre los candidatos presidenciales de los dos bloques Dilma (PT) y Sierra (PSDB).

Los movimientos sociales continúan en reflujos y las organizaciones de izquierda aún no salen de la crisis ideológica de los últimos años. Pese a ello la incapacidad del gobierno de superar una política asistencial lleva a los diferentes actores del movimiento social a posicionarse respecto de la necesidad de modificaciones estructurales que tardan y no llegan.

La CUT y la CTBB ya decidieron – y los movimientos de la Vía Campesina Brasil se sumarán a ellos – hacer una

gran jornada de paralización nacional en todo país, el día 18 de mayo, como forma de presión por la aprobación del proyecto de ley que reduce la jornada de trabajo de 44 para 40 horas semanales.

Esta, pareciera ser la demostración de que, finalmente, la mayoría “parlamentaria”, construida por el gobierno a peso de oro, no fue suficiente para avanzar en las cuestiones fundamentales para la clase trabajadora, como la reducción de la jornada de trabajo, el proyecto que determina la expropiación de las haciendas con trabajo esclavo y el mantenimiento del código forestal para proteger el medio ambiente.

Un muro para esconder la pobreza de Rio

Comenzaron las polémicas obras de instalaciones de muros que deben aislar trece favelas en la zona sur de la ciudad de Río de Janeiro (RJ) de las Líneas Roja y Amarilla, las principales vías del estado.

Según el alcalde Eduardo Paes (PMDB), las placas disminuyen los riesgos de atropellos en las calles y aíslan las favelas del barullo de los coches. Pero, para la población de las favelas, esta es más una forma de discriminación. El presidente de la Federación de Favelas

del estado de Río de Janeiro (Faferj), Rossino Castro, afirma que la obra atiende a los intereses de los organizadores de las Olimpiadas, prevista para acontecer en la ciudad en 2016, "porque el gobierno vende una imagen de que las favelas son urbanizadas y organizadas. El alcalde César Maia (DEM) recibió mucho dinero para transformar las favelas en barrio, y no hizo eso. Entonces, están haciendo los muros para esconder las favelas de los turistas porque ellos irán a pasear mucho por las líneas Amarilla y Roja."

El proyecto ya fue cuestionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pidió explicaciones al gobierno del estado. En la época se dijo que el objetivo era impedir el avance de las favelas sobre la selva atlántica, preservando así el medio ambiente.

Policía Militar desaloja violentamente a familias del MST

El Batallón de Choque de la Policía Militar realizó un violento desalojo de 75 familias del MST de un lati-

fundio improductivo, en el municipio de Touros (la 70 km de la capital), en la región costera de Rio Grande do Norte.

Los 150 soldados del batallón llegaron al local a medio día. Inmediatamente después, quemaron las barracas con las pertenencias de las familias y dejaron seis personas heridas, que fueron llevadas al Hospital Municipal de Toros. El comando de la PM presentó un documento falso de restitución de la propiedad, que tenía el sello del Tribunal de Justicia de Acre y no había la firma del juez.

El año pasado, el Inkra realizó distintas inspecciones y concluyó que la hacienda de 950 hectáreas era improductiva. El latifundio estaba ocupado hace dos meses por los trabajadores rurales, por segunda vez. La primera ocupación en ese latifundio fue en 2003, cuando el MST denunció que el área no cumplía su función social, como determina la Constitución. Actualmente, más de 2000 familias están acampadas en Rio Grande do Norte en la lucha por la Reforma Agraria.



La derecha chilena muestra su cartas

Cumplido el primer mes del gobierno de Piñera, va quedando claro cual es el cambio prometido por la derecha.

En lo económico, el nuevo gobierno, apoyándose en la catástrofe nacional que significó el terremoto del pasado febrero, ha desarrollado una actividad incesante para promover el endeudamiento como estímulo de la economía.

A nivel país, la búsqueda de fondos vociferada a los cuatro vientos no tardó en ser respondida por diferentes bancos. Son, según el propio gobernante, más de 30 mil millones son los necesarios para financiar la reconstrucción. Y aunque la cifra es discutida por algunos analistas de la propia derecha, a nadie le cabe duda de que Chile volverá a incrementar de manera extraordinaria su deuda externa.

Después de años de rigor fiscal para conseguir disminuir la "maldita" deuda con la banca internacional, de una forma impune, Piñera hipoteca al país por los próximos decenios.

Y mientras, a nivel del gobierno se inicia el paseo por los bancos, a nivel de los ciudadanos la cosa no va mejor.

Según las cifras entregadas por diferentes estudios, son más de 200 mil las viviendas que resultaron parcial o totalmente destruidas por el terremoto. Y como no podía ser de otra forma, en coherencia con la actuación a nivel internacional, el gobierno de Piñera

lejos de asumir protagonismo en la ayuda a la reconstrucción, le ha cedido este rol a la banca.

Durante el último mes, las páginas de los periódicos chilenos se han llenado de ofertas de créditos personales para la reconstrucción de las viviendas dañadas. Los bancos, viendo un buen negocio en la desgracia ajena, promueven sin tapujos el endeudamiento como la única forma de recibir ayuda eficaz. Incluso, haciendo gala de un supuesto interés social, se diferencia la tasa del crédito concedido, dependiendo del lugar en donde se encuentre la vivienda y del nivel de magnitud que tuvo el terremoto en esa zona. Todo un ejemplo de humanismo capitalista.

Pero si a nivel económico, la máquina derechista impulsa su cambio a todo vapor, a nivel social no se queda a tras.

Nuevamente, la excusa del terremoto permitió ver la crudeza de lo que Piñera y su equipo están dispuestos a hacer para mantener el orden.

La movilización de decenas de miles de militares por todo el país, con la única misión de mantener el orden, le permitió al mandatario salirse de su imagen de empresario moderno para asumir un rostro más feroz; el de defensor de la patria y la propiedad privada.

En un discurso improvisado, transmitido en directo a

nivel nacional, apenas minutos después de recibir la banda presidencial, y luego de el pánico generado por un nuevo terremoto en pleno traspaso del mando, Piñera señaló expresamente: " en este momento de tanta intranquilidad en el país, quiero decirle a todos los chilenos, que para mí que la Fuerzas Armadas no son un elemento más del Estado, son la columna vertebral sobre la que se sostiene la nación". Y una vez finalizada su corta intervención pidió frente a las cámaras que se movilizara una división del ejército hacia la zona más afectada, Rancagua.

Estos hechos, materializados en el toque de queda de un mes de duración en la zona de Concepción, bastan para demostrar que si de mantener el orden se trata, al nuevo mandatario no le temblará la mano a la hora de sacar a los militares de los cuarteles. Ya

lo hizo, y con toda la impunidad que te permite la nula denuncia internacional, lo volverá a hacer cada vez que vea la posibilidad de una desestabilización a nivel social.

Desde todos los ángulos el primer mes de Piñera ha sido una demostración acelerada de la capacidad de respuesta de la derecha. Una respuesta que se basa en dejar las imágenes de flexibilidad y "buena onda" de lado para asumir un rostro más duro y pragmático. Un rostro que lo mismo provocará adhesiones que el rechazo instantáneo de amplias capas de la población chilena. Un descontento que puede ir mucho más allá de los márgenes en lo que se movió en los pasados 20 años de gobierno de la Concertación.



La CONAIE anuncia movilizaciones, el gobierno también

Después de la ruptura del diálogo entre las organizaciones indígenas y el presidente ecuatoriano, el pulso entre la CONAIE y el gobierno siguió escribiéndose este mes de marzo.

El presidente de La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador anunció tras la finalización de su asamblea, retomar las movilizaciones, reafirmando que su lucha no tiene como principal objetivo hacer caer al presidente Correa sino que "Nosotros queremos un país para todos, no sólo para un sector privilegiado. El pueblo indígena siempre ha sido marginado a lo largo de la historia y si la CONAIE busca la movilización, no es para buscar el poder, es para buscar la revolución popular, una revolución para todos". De todos modos, Marlon Santi presidente de la CONAIE, reconoció que las movilizaciones indígenas podían tener como consecuencia que el presidente fuera depuesto aunque "Si el señor Presidente se cae será porque el pueblo lo decidió de esa manera". La CONAIE denuncia que el gobierno no ha cambiado ni en su socialismo del siglo XXI, ni en su revolución ciudadana, ni un ápice del estado colonial y el neoliberal.

Por su parte, el presidente Correa anunció que no piensa dejar que los indígenas avancen en su plan separatista e hizo un llamamiento al "levantamiento de todo el pueblo ecuatoriano contra estas actitudes, ya no podemos aceptar esta clases de cosas en el Ecuador moderno, plurinacional del siglo 21"

A pesar de ello unos 2000 indígenas marcharon por las calles de Cuenca iniciando la "movilización progresiva" anunciada por la CONAIE como rechazo a la Ley

de Minería y del Proyecto de Ley de Recursos Hídricos porque "deja la puerta abierta" a que las compañías mineras tengan la concesión sobre el agua, aspecto que perjudicaría no sólo a las comunidades, sino también a todo el ecosistema hídrico.

Se constituye el quinto poder

Tras seis meses de trabajo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), denominado popularmente como el 'Quinto Poder del Estado', escogió sus 14 integrantes a través de un concurso de méritos y oposición. La Asamblea Nacional posesionó a los miembros del CPCCS, y tal como establece el Art. 40 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de los primeros cinco días de trabajo se eligió a Juana Miranda como presidenta y a Fernando Cedeño como Vicepresidente. Además se escogieron a David Rosero, Patricia Ordeñana, Luis Pachala, Mónica Banegas y Andrea Rivera como vocales principales y William Arias, Evans Herrera, Óscar Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera, Linda Vidal y Franklin Moreno, como sus suplentes.

A través de varias comisiones de selección y veedurías ciudadanas integradas por cinco delegados de las funciones del Estado y cinco representantes de organizaciones sociales y de la ciudadanía el CPCCS deberá

elegir, tal y como se establece en el artículo 208 del Capítulo 5 de la Constitución: al Fiscal, al Procurador, al Defensor del Pueblo, al Contralor, a los miembros del CNE, al Tribunal Contencioso Electoral, al Consejo de la Judicatura y a los superintendentes.

La CONAIE e Izquierda democrática pidieron repetidamente que el proceso selectivo fuera declarado nulo, pero no fue hasta que el mismo día en que se anunciaba la resolución de los 14 integrantes del CPCCS, que un conjunto de ocho ciudadanos pidió a la Corte Constitucional que se posicionara al respecto. Para Milton Castillo, uno de los impulsores de la acción, el proceso planteado es de expresa inconstitucional en los artículos 29, 31 y 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, y al Art. 25, literal g, del Reglamento puesto que "Las normas se refieren a la imposibilidad de que, aun cuando haya irregularidades en el procedimiento, haya cómo apelar de ellas y eso violenta derechos fundamentales consagrados en convenios internacionales y en la Constitución"

Baile de carteras

El presidente sorprendió a todo al anunciar que había decidido "Solicitar la renuncia de todos los ministros,

secretarios de Estado, altos funcionarios para que el Presidente, con ciertos miembros del buró político, tengan la libertad de hacer los reemplazos que consideren necesarios". Después que estas se presentaron Correa aceptó la renuncia del que fuera ministro de Industrias y Productividad, Xavier Abad. La salida de Abad se debería a la falta de acuerdo entre este y el presidente en materia de Política Industrial, y más concretamente sobre la eliminación de la importación de determinados productos y debido a los desacuerdos sobre un programa estatal para a universidades privadas desarrollen planes industriales. La aceptación de su renuncia era conocida por los medios antes que se produjera debido a la demanda que le hizo el mandatario para que no asistiera a la última reunión del Ejecutivo. También se aceptó la renuncia del que hasta el momento fuera el ministro de educación Raúl Vallejo, y el de Justicia Néstor Arbitro, cargos que fueron ocupados por Gloria Vidal y José Serrano, respectivamente. En el caso de Vidal, su pronunciamiento no satisface a la UNE que ven en ella una política muy continuista.



Venezuela: la derecha se prepara para volver al Parlamento

La prensa y los tribunales españoles se han convertido en la punta de lanza de los intereses desestabilizadores de quienes miran con recelo hacia Latinoamérica.

La dureza analítica de los periodistas al atacar a la dictadura cubana, o al indigenista Evo Morales, encuentra, menudo, una batería de argumentos proporcionados por diligentes jueces de los tribunales españoles.

Por ello no extraña el rol jugado por los jueces y periodistas en el caso de Venezuela. Durante semanas el ejercicio comunicacional, apoyado en supuestas evidencias fruto de pesquisas judiciales, fue el publicitar las “probadas” relaciones del gobierno de Chavez con la ETA.

Todo un andamiaje al cual, hábilmente Chavez respondió indirectamente con la visita del Primer Ministro Putin a Caracas. “Tenemos un banco de información muy bueno sobre los que ayudan al terrorismo y nunca tuvimos un indicio de que Venezuela apoyase el terrorismo”, señaló Putin, enterrando al instante un debate en el que se expuso la fragilidad de la argumentación española.

Pero más allá de responder a la “guerrilla” externa que busca mantener una presión internacional que impida la expansión del chavismo, las preocupaciones del gobierno venezolano están centradas en las próximas elecciones de septiembre.

El parlamento venezolano es unicameral con 165 integrantes, pese a que por razones excepcionales la ac-

tual tiene 167, elegidos cada cinco años, a diferencia del presidente de la República que tiene un mandato de seis años.

En circuitos nominales se eligen 110 diputados, otros 52 en listas de los 23 estados y el Distrito Capital en que se divide el país, y tres bancas se reservan para los pueblos indígenas.

En los comicios parlamentarios de 2005, la oposición desistió a última hora de participar aduciendo desconfianza en las autoridades electorales, por lo cual todas las bancas quedaron en manos de candidatos que se presentaron como partidarios de Chávez. Pero desde 2007 una docena de ellos se han declarado opositores o independientes.

Según estimados opositores, este sector tiene la posibilidad de ganar un mínimo de 40 de los 165 diputados, pero podría llegar hasta 80, cercano a la mayoría simple de 83, a partir de lo cual comienzan a sacar cuentas con posibles deserciones “chavistas”.

En este caso se apuntan las aspiraciones de atraer a diputados del pequeño Partido Patria para Todos (PPT), un tradicional aliado del PSUV ahora en disputa con Chávez, con lo cual se convertiría en un partido “bisagra” capaz de inclinar la balanza parlamentaria.

“Son elecciones cruciales, porque si la oposición gana se dedicará a desestabilizar al país. Ellos no vienen a

trabajar, vienen por mí, para desmontar las leyes revolucionarias y los programas sociales”, planteó Chávez.

Asesinan a otro dirigente del PSUV

Otro dirigente del PSUV fue asesinado en Táchira. La víctima, Jorge Enrique Medina Delgado, de 51 años, iba conduciendo en coche cuando fue interceptado por dos individuos a bordo de una moto, quienes le detonaron varios disparos. Su esposa, que lo acompañaba en aquel momento, resultó herida de dos impactos de bala.

Este caso se suma al de Junior Hermosos, otro militante del PSUV de 23 años, que fue asesinado en Caricuao. El padre de la víctima aseguró que lo mataron simplemente por ser chavista. La muerte se produjo cuando Junior se encontraba instalando un punto de reinscripción y actualización de datos de los militantes del partido. El asesino se acercó a la víctima y sin mediar palabra le propinó tres disparos mortales.

En relación a los recientes asesinatos de dirigentes socialistas, Chávez convocó a los partidarios del proceso revolucionario a estar alertas y movilizados contra las maniobras subversivas.

“Llamo al pueblo a seguir adelante, sé que el pueblo no tiene miedo. No lograrán chantajearnos ni atemorizarlos, porque se trata de construir la patria de nuestros hijos”, sentenció.

Por su parte, Omar Pérez, integrante de la Juventud del PSUV, dijo que esta nueva muerte y los recientes asesinatos de estudiantes bolivarianos, sindicalistas revolucionarios y militantes en general no amedrentarán la lucha por la Venezuela socialista.

Comunidades indígenas denuncian paralización de entrega de tierras

El proceso de demarcación de tierras indígenas se encuentra prácticamente paralizado. En los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, entidades con mayor población y diversidad indígena, el avance ha sido prácticamente nulo.

Entre 2005 y 2009 se han otorgado 40 títulos de pro-

iedad colectiva, por un total de 1.000.516 hectáreas, beneficiando a 73 comunidades, lo que representa el 3% de las 2295 comunidades indígenas del país. A un promedio de 14,6 comunidades tituladas por año, la demarcación podría demorar unos 150 años en completarse.

El 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, el ejecutivo nacional conmemoró en la Sierra de Perijá con la entrega de cuatro títulos de propiedad colectiva de tierras a los sectores Aroy, Shirapta y Tinacoa del pueblo Yukpa (Sierra de Perijá, estado Zulia), por un total de 41.630 hectáreas y a la comunidad Palital del pueblo Kariña (estado Anzoátegui)⁶, con una superficie desconocida.

Luego de tal evento, el Cacique Kariña José Luis León de la Comunidad Palital, consignó un documento de denuncia sobre las irregularidades que presenta el “Título de propiedad”. Su denuncia plantea que no se respetaron las poligonales aprobadas en asamblea comunitaria y acordadas con la Comisión Regional de Demarcación. Además, denuncia directamente a Sergio Rodríguez, Viceministro de Ordenación del Territorio del Ministerio del Ambiente, como responsable de estas irregularidades. Finalmente, solicitan “al Poder Ejecutivo, a la Defensa Pública, a la Defensoría del Pueblo, y al Tribunal Supremo de Justicia, dentro de sus competencias, tomar las medidas administrativas o judiciales, a los fines de que sea revisado el contenido del documento reflejado en el título”. A raíz de sus denuncias, José Luis León es objeto de hostigamiento por parte de la Guardia Nacional.

La falta de garantías sobre sus territorios permite, por ejemplo, la invasión de tierras del pueblo Pemón en Santa Elena de Uairén, por parte de unos 300 ocupantes auspiciados por autoridades municipales, a los que concedieron permisos provisionales de ocupación. Esta situación irregular ocasionó un conflicto de propiedad, que terminó en el enfrentamiento entre indígenas e invasores en el 2009.



Posneoliberalismo: estrategia conservadora

*Beatriz Stolowicz (México)**

¿Vino nuevo en odres viejos? Vuelve a hablarse de posneoliberalismo. Pero ahora para nombrar una idea de superación del neoliberalismo que, aunque cuestiona al capitalismo, aún tiene que construirse en o desde su realidad. De acuerdo. Pero ¿ese camino se recorrerá pensando desde el punto de vista del capital? ¿O creando las condiciones para ir debilitándolo? Si la respuesta fuera la primera, es bueno saber que esa experiencia ya tiene veinte años, y que ha sido un sofisticado camino para cumplir a cabalidad los objetivos de la contrarrevolución neoliberal para la expansión del capital transnacional destructor de vidas y planeta. Vayan aquí unas pinceladas para contribuir al debate.

La estrategia posneoliberal conservadora comenzó desde principios de la década de 1990. Fue diseñada para estabilizar y legitimar, en democracia, la reestructuración capitalista impuesta con dictaduras y autoritarismos civiles. Se buscaba construir un consenso activo y/o pasivo sobre las virtudes e inevitabilidad del capitalismo comandado por el gran capital. La crisis del socialismo facilitaba la tarea aunque más no fuera como resignación, pero los latinoamericanos vivían los estragos de la “década perdida” y esperaban cambios económicos y sociales con las democracias. Debía evitarse que esas expectativas se dirigieran a reconquistar los derechos sociales conculcados, o a tratar de conquistarlos. Debía convencerse de que había que “corregir los excesos del neoliberalismo” que produjeron recesión y pobreza, pero sin volver al “populismo” que había sido responsable del caos económico que favoreció las “soluciones autoritarias”. Se presenta como una tercera posición no equidistante, pues es pos-neoliberal pero anti-populista. El nuevo camino es formulado por el neoestructuralis-

mo desde la Cepal, el BID y el Banco Mundial, como respuesta necesaria y realista, y por lo tanto inevitable. Definían al neoliberalismo como “monetarismo de laissez faire” y al FMI como el responsable. Las políticas ortodoxas debían flexibilizarse pero no abandonarse, porque habían sido una “medicina amarga pero necesaria” para deshacerse del modelo de desarrollo hacia dentro por sustitución de importaciones, un “aprendizaje doloroso” sobre la necesaria estabilidad macroeconómica para aprovechar las “oportunidades” de la economía mundial. La “alternativa” era formulada, hacia el largo plazo, como un nuevo modelo de “crecimiento productivo con equidad” basado en las exportaciones del sector primario. A corto plazo, sería necesaria una “transición” impulsada por la inversión extranjera dado el endeudamiento (y la deuda debía pagarse), para lo cual eran necesarias “reformas estructurales orientadas al mercado”: desregulación, privatizaciones, apertura externa; así como la creación de un “clima de confianza” para los inversores manteniendo reducido el déficit fiscal y con ganancias más atractivas –reducción del salario real- y garantizando seguridad jurídica para sus derechos de propiedad. Esas “reformas estructurales” necesitarían de un mayor “activismo estatal” para “fortalecer al sector privado”, para lo que se necesitaba la reforma del Estado para hacerlo “chico pero eficaz”.

Como se observa, la “transición” es la continuación de las políticas impuestas a sangre y fuego para demoler los componentes del anterior patrón basado en el mercado interno y a las funciones sociales del Estado desarrollista y los intereses sociales diversos al capital que aquél representó. Y la “corrección” consiste en las mismas “reformas estructurales” sistematizadas por John Williamson como el “Consenso de Washington”.

Los neoestructuralistas admitían la similitud, pero defendían que era una respuesta endógena, no una imposición externa. Esto explica que en la primera mitad de la década no se hablara de “Consenso de Washington”, y mucho menos para presentarlo como sinónimo de “neoliberalismo”. Esta sinonimia se estableció en la segunda mitad de la década, cuando el Banco Mundial encabezó la “crítica al neoliberalismo” con el célebre Más allá del Consenso de Washington. Pero una vez más, no se cuestionaban las “reformas estructurales de primera generación” del mentado “CW” que habían atraído al capital extranjero, sino el modo de ejecutarlas; esta segunda fase planteaba “corregirlas” con “reformas de segunda generación” para retenerlo, ampliando los mercados para el capital financiero. Pero al inicio del nuevo siglo, los posneoliberales criticaron las reformas de segunda generación porque derivaron en un “neoliberalismo plus”, caracterizado ahora como la especulación financiera que obstaculiza el crecimiento. Entonces comienza la tercera fase de la estrategia posneoliberal, que plantea recuperar el crecimiento con un “nuevo desarrollismo” primario-exportador comandado por el capital transnacional, también translatino, y con inversión en infraestructura para la explotación de los recursos naturales y sistemas multimodales de comunicación y transporte para abaratar su extracción; igualmente basado en la disciplina fiscal, alta rentabilidad y políticas compensatorias para atender la pobreza.

Cada una de estas “nuevas críticas al neoliberalismo” redefinido, se produce cuando se intensifican los rechazos sociales a las políticas en curso, con sus inaceptables inestabilidades para el capital. Y las “nuevas alternativas”, empaquetadas en una envolvente retórica, son acciones de profundización de la estrategia de acumulación por desposesión y sobreexplotación. Es una estrategia de permanente adecuación táctica en el uso de sus instrumentos políticos, sociales e ideológicos, para producir consensos y neutralizar oposiciones. Está dirigida, primordialmente, a integrar o subordinar a la izquierda a los objetivos sistémicos; e incluso a convertirla en ejecutora de la estrategia cuando crece su fuerza electoral y conquista gobiernos, con lo cual, la estabilización y legitimación de los objetivos capitalistas alcanzarían niveles superiores pese a las agudas tensiones y contradicciones que generan.

Fue diseñada por una derecha lúcida, que reconocía el desafío de ejecutar esas políticas en democracias, aunque éstas tienen la ventaja de que facilitan la gestación de consensos políticos a favor de las “reformas”. Un prerrequisito era que se transformaran las concepciones de la política y la democracia como instrumentos para la gobernabilidad. Pero ésta dependía de una mayor legitimación social a las “re-

formas económicas”. Los programas asistencialistas focalizados servirían para absorber tensiones sociales. Pero la “transición” sólo sería exitosa si las políticas sociales producían una reestructuración social orientada al mercado; que fuera aceptada por la sociedad como la materialización de una “nueva concepción del bienestar”, de modo que la flexibilización laboral, la tercerización mediante pequeñas y medianas empresas, el autoempleo (trabajo informal), fueran aceptados como medios para acceder a la “equidad”. Y también, que esas políticas sociales fueran visualizadas por los empresarios, no como un despilfarro, sino como una oportunidad para su inversión y ganancias en la provisión de esos servicios sociales con financiamiento público. La asociación Estado-mercado fincada en lo local contribuiría, además, a disolver las presiones clasistas populares a nombre del reencuentro con la comunidad perdida. En la legitimación de esta reestructuración social a favor del capital, las organizaciones intermedias (sindicatos, ONG, etc.) tendrían un importante papel que cumplir. En torno a las nuevas políticas públicas se teje un nuevo clientelismo, tanto entre los destinatarios más pobres como en los sectores medios y profesionales empleados en su ejecución. Con el estandarte de su vocación por la “equidad” y la “participación”, la estrategia conservadora logrará presentarse como el nuevo progresismo desde la segunda mitad de los noventa. Era pos-neoliberalismo, además, porque apelaba a un mayor “activismo estatal” en contraposición a un *laissez faire* que en realidad nunca existió. Un papel más activo del Estado al servicio del capital: financiando su acumulación; como activo constructor de gobernabilidad (governability) a través de su acción gubernamental (governance o “gobernanza”); y en una más sofisticada utilización del monopolio de la fuerza, por ejemplo, para convertir la neo-oligarquización del Estado en un legitimado Estado de derecho.

En cada país, esta estrategia cumple sus fases y prerrequisitos en distintos tiempos y con distintas articulaciones de sus instrumentos, con éxitos diferentes según sea el derrotero político e ideológico de los sectores populares. Pero su mayor logro es el ideológico. Sobre todo entre los intelectuales, cautivados con los postulados teóricos con los que se justifica la estrategia (neoinstitucionalismo, socialliberalismo, neodesarrollismo, entre otros).

Acabamos de presenciar el fruto maduro del posneoliberalismo en Chile, que realizó los objetivos refundacionales del pinochetismo y los devuelve a sus manos.

**Beatriz Stolowicz es socióloga, profesora e investigadora de la UNAM.*

Entre la convergencia progresista y las recetas de la clase dominante

Luismi Uharte (Paraguay)*

El todavía incipiente proceso de unidad de sectores progresistas puede ayudar a impulsar un cambio que no ha sido tan grande como se esperaba con la llegada de Fernando Lugo al poder, tanto por la tibieza del Gobierno como por el bloqueo impuesto por las clases y medios dominantes.

El Paraguay que había desaparecido simbólicamente del mapa de América del Sur, en gran medida producto de la dura y prolongada dictadura del general Alfredo Stroessner, reivindicaba un lugar en el imaginario colectivo latinoamericano y mundial. La trágica caracterización del país como «una provincia argentina dentro de Brasil» pretendía ser superada.

Tras más de año y medio de Gobierno efectivo -desde agosto de 2008-, la realidad no ha cambiado tanto como muchos deseaban, en parte por la combinación de temor y tibieza gubernamentales y, sobre todo, por la situación de bloqueo de facto que han impuesto las clases dominantes y sus medios de comunicación.

Secuestro de Fidel Zavala. En los últimos meses, el tema central del debate político fue impuesto por los grandes medios: el secuestro del ganadero Fidel Zavala por parte del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo). El ultraconservador rotativo «ABC Color» dirigió la campaña mediática para convertir este suceso en asunto de interés nacional, eclipsando otra serie de informaciones de indudable relevancia, como el papel proto-golpista del Parlamento, la histórica renegociación con Brasil del Tratado de Itaipú...

Las clases dominantes criollas aplicaron con notable precisión los métodos tradicionales de alienación mediática y solidaridad interclasista inducida que en otras latitudes se han utilizado con bastante éxito.

El «lazo blanco» como símbolo de solidaridad con el

secuestrado se convirtió en la herramienta política fundamental para construir una conciencia colectiva donde todos los problemas de país se reducían al secuestro de un acaudalado ganadero, mientras una masa interclasista manifestaba su condena ante este suceso. Incluso algunos sectores de la propia izquierda terminaron repitiendo el discurso hegemónico elaborado por los medios oligárquicos.

Paradójicamente, a ninguno de estos medios se les ocurrió plantear una campaña similar por los centenares de paraguayos que en pleno siglo XXI siguen sufriendo otra forma de «secuestro», trabajando literalmente en régimen de esclavitud en el extenso occidente del país (el Chaco).

Asesoría contrainsurgente colombiana. La insistencia de los mass media en vincular al EPP con las guerrilla colombiana de las FARC y, paralelamente, el intento de identificar a ciertos miembros de la izquierda del Gobierno como próximos a grupos extremistas, además de acusar al Ejecutivo de inoperante e incompetente, facilitó un contexto para la intensificación de recetas represivas.

El ministro del Interior, Rafael Filizzola, identificado como uno de los hombres «preferidos» por la Embajada de EEUU y ubicado en los sectores socialdemócratas más a la derecha, no tuvo excesivos reparos en incrementar la presencia policial en zonas campesinas. La consecuencia, obviamente, fue el aumento del

control y la criminalización del movimiento campesino más combativo.

Pero la decisión más controvertida, que trasciende al ministro del Interior y que salpica al propio presidente Fernando Lugo es la aceptación de la cooperación colombiana en materia de secuestro y de contrainsurgencia. El riesgo de un apoyo de este carácter es muy alto, teniendo en cuenta que el Estado colombiano es líder en el continente en materia de violación de derechos humanos (paramilitarismo, fosas comunes, parapolítica...).

Rifirrafe con la Embajada USA. En medio de este clima contrainsurgente creado artificialmente, el ministro de Defensa, Luis Bareiro, se salió por la tangente, enviando una carta a la embajadora de EEUU, Liliana Ayalde, advirtiéndole sobre lo poco conveniente de sus reuniones con sectores de la oposición (civil y militar). Tras el reciente y exitoso golpe en Honduras y la habitual dinámica conspirativa del actual vicepresidente con sectores poco afectos a la democracia, no resulta extraña la preocupación del ministro. Preocupación que también ha manifestado por la que considera poco acertada decisión de recibir cooperación «antiterrorista» colombiana.

Estas posiciones de Bareiro, que pudieran interpretarse como de inspiración antiimperialista, han vuelto a alterar el pulso de los medios de comunicación oligárquicos, que además de lanzar duras diatribas contra el ministro, han rescatado por enésima vez el absurdo y cansino leit motiv del «gobierno subordinado a Chávez y al bloque bolivariano».

Convergencia progresista. En este contexto de hegemonía del discurso mediático más conservador, a lo largo de los últimos meses se ha puesto en marcha un proceso de encuentro, diálogo y convergencia entre diversos sectores de la izquierda y la socialdemocracia más consecuente. El surgimiento del denominado Espacio Unitario-Congreso Popular, conformado por los partidos de izquierda más influyentes (P-MAS, Partido Comunista, Convergencia Socialista y Tekojoja) y por varias de las organizaciones más importantes del movimiento campesino y popular, ha supuesto un gran avance en la histórica trayectoria fragmentada de la izquierda paraguaya.

El acercamiento al Espacio Unitario del sector socialdemócrata más progresista, liderado por el ex intendente de Asunción Carlos Filizzola, ha dotado de mayor atractivo y potencialidad a este proyecto de convergencia, sobre todo por la cercanía de las elecciones municipales de noviembre de este año que, indudablemente, son concebidas por todos como el primer gran plebiscito del Gobierno y del propio Fernando Lugo.

A su vez, el influyente ministro de Presidencia, Miguel Ángel López Perito, ubicado también en el amplio es-

pectro ideológico progresista, acaba de impulsar un nuevo proyecto político denominado Movimiento 20 de Abril, que no se define expresamente de izquierda, pero que pretende capitalizar la esperanza del cambio.

De cualquier manera, la clave de nuevo estará en el apoyo simbólico de Lugo, que continúa siendo la figura carismática clave para catalizar a la «multitud».